

Coyhaique, tres de febrero de dos mil veintitrés.

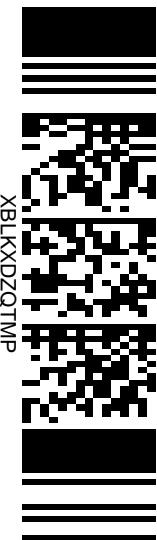
VISTO Y OÍDO:

En estos antecedentes Rol Corte N° 248-2022, comparece don Lorenzo Darío Avilés Rubilar, abogado, Defensor Penal Privado, en representación del sentenciado Maicol Yonathan Cuevas Pérez, quien deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, con fecha 11 de diciembre de 2022, por medio de la cual y en lo recurrido, se condenó, sin costas, entre otros, a Maicol Yonathan Cuevas Pérez, como autor del delito de homicidio, en grado de frustrado, en perjuicio de Jaime Turena Oyarzún, y de lesiones leves en perjuicio de Rafael Turena, solicitando, en definitiva, se invalide la sentencia impugnada y el juicio oral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 376 del Código Procesal Penal, por haberse incurrido en la causal absoluta de nulidad contenida en la letra b) del artículo 373, del mismo texto legal, en relación con el artículo 374 letra e) y los artículos 342 letras c) y d) y 297, todos del Código Procesal Penal.

En la vista del recurso alegaron vía plataforma zoom el Defensor Penal Privado don Lorenzo Avilés Rubilar por el recurso y contra el recurso, en representación del Ministerio Público, el abogado don Álvaro Pérez D'Alencon, quien instó por el rechazo de la nulidad y se confirme la sentencia recurrida.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, don Lorenzo Avilés Rubilar, abogado, Defensor Penal Privado, en representación del sentenciado, deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, con fecha 11 de diciembre de 2022, invocando como primera causal de invalidación la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, y en segundo término la causal del mismo texto legal, del artículo 374 letra e) y los artículos 342 letras c) y d) y 297, todos del Código Procesal Penal.



SEGUNDO: Que, al fundamentar su recurso de nulidad, en la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, refiere que para estar frente a un delito de homicidio, en grado de frustrado, se exige demostrar o que pueda deducirse imparcialmente el ánimo de matar, esto es, del dolo homicida, y que el o los autores hayan puesto todo lo necesario de su parte para la consumación, pero que ésta no se logre por causas independientes a su voluntad. Agrega que en autos ha quedado establecido más allá de toda duda razonable, que el origen de la gresca en la terminó lesionado un adulto y su hijo, fue por discordias que el joven tenía con otro sujeto, y que conocidos de este sujeto van por él. Por lo que el ánimo de los agresores, señala el recurrente, fue de causar lesiones, precisamente, al menor, no habiendo elemento de juicio objetivo que permita deducir el ánimo de matar, por cuanto, el padre del joven agredido, Jaime Turena, ni siquiera era conocido por los acusados. Señala que si bien sufrió lesiones en el cráneo, éstas no fueron de una entidad para poner en riesgo su vida y que decidir condenar por el delito de homicidio, por la zona lesionada – cráneo- que indicaría una agresión homicida, es un error, y si fuera así, toda agresión en la cabeza, independiente del resultado lesivo, sería demostrativa de un ánimo homicida, lo que no se condice con la realidad ni con la normativa nacional, por lo que resulta contradictorio el raciocinio del Tribunal Oral al observar que habiendo dos lesionados de distinta consideración, respecto de uno solo hubo ánimo de lesionar y de matar respecto del segundo. Consecuentemente, señala que el a quo, al haber efectuado una errónea aplicación del derecho, ha terminado condenando a su representado por un delito que no corresponde y a una pena excesiva.

Invoca como segunda causal de nulidad, la contemplada en el artículo 374 letra e) en relación a los artículos 342 letras c) y d) y 297,



todos del Código Procesal Penal, sosteniendo el recurrente que el fallo recurrido vulnera los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, además de incumplir con el deber de la motivación y fundamentación de la sentencia.

Al respecto señala que se consideran hipótesis de incumplimiento del deber de motivar las decisiones jurisdiccionales cuando: a) Hay ausencia total de fundamentos, esto es, cuando se resuelve de determinada manera sin dar razón alguna que explique lo resuelto; b) Cuando se basa en antecedentes calificados como pruebas que no pueden ser considerados como tales por su falta de idoneidad para ser fuente de conocimiento; c) Cuando hay fundamentación aparente, cuando las conclusiones del fallo se basan en meras opiniones y no en probanzas; d) Cuando hay fundamentación incongruente, esto es, cuando una conclusión se basa en una prueba con la que no tiene relación alguna; e) Cuando hay fundamentación falsa, cuando una conclusión se sustenta en una reproducción inexacta de los dichos de un testigo; f) Cuando hay fundamentación global, cuando las conclusiones no señalan de manera específica la prueba que le sirve de fundamento; g) Cuando hay fundamentación omisiva, cuando no se valora prueba dirimente, que si se hubiera valorado llevaría a adoptar una conclusión diversa a la acogida y, h) Cuando hay fundamentación contradictoria, esto es, cuando se afirma y se niega simultáneamente lo mismo en las conclusiones adoptadas.

El recurrente señala que la sentencia omite fundamentar la valoración que hace de la prueba pericial, estableciendo que según la pericia del Servicio Médico Legal, las lesiones causadas a don Jaime Turena son de carácter grave, que tardarían entre noventa a cien días, y que si bien, no existió riesgo vital en un primer instante, luego requirió una prótesis en su cabeza. No obstante la pericia, la sentencia impugnada omite señalar que frente a preguntas directas efectuadas



por los intervinientes, el perito legista señaló que no hubo riesgo vital a consecuencia de las lesiones imputadas, pudiendo deducirse, que el riesgo de muerte de don Jaime Turena sería más o menos similar a aquel que cada uno de nosotros presentaría en el día a día, por lo que la valoración de esta prueba fue adoptada en contra de las máximas de la experiencia en relación con una valoración omisiva, al ser un hecho de la causa evidente que el motivo de la agresión fue una rencilla previa entre un menor de edad con un tercero, conocido por los agresores, siendo el ataque dirigido en su contra y no contra el padre, cuyas lesiones solo fueron graves, no poniendo en ningún momento en riesgo su vida.

Alega que la sentencia no se hace cargo de todos los elementos introducidos en el juicio para la comprensión y concordancia plena de toda la prueba rendida, debiendo haber considerado la declaración íntegra del perito legista Dr. Solari y no solo una parte de ella, ya que en su motivo Décimo el fallo consigna que las lesiones ocasionadas a don Jaime Turena provocaron una enfermedad por treinta días y que en ningún momento posterior estuvo en riesgo vital, según constata la atención de urgencia DAU, incorporada al juicio, que da cuenta que el paciente Turena, a las 06:24 horas del 1 de mayo de 2022 “ ingresa caminando” al examen, con un puntaje en escala de Glasgow de 15, esto es, llega completamente lúcido, condición que se mantiene hasta antes de entrar a pabellón.

En cuanto a la valoración de la prueba en contra de los principios de la lógica, expresa que el tribunal debe llevar a cabo un razonamiento que ha de plasmar y exteriorizar en la sentencia, lo que en el caso de autos no ocurre, pues se exige al juzgador utilizar los conocimientos que formalmente ha adquirido durante el proceso y lograr un razonamiento lógico, comprensible y fundado, lo que en la especie tampoco ocurre.

Respecto al principio de la razón suficiente expresa que la agresión se debió a rencillas previas entre Rafael y un tercero, cuya



participación si bien fue mencionada en un principio por la víctima en la Fiscalía, luego fue omitida expresamente en la acusación. De ello se colige que el origen de la agresión fue precisamente para atacarlo a él y no a su padre y que las lesiones infligidas al menor fueron leves, no existiendo fundamento probatorio para sostener que hubo un ánimo o intención de matar. Expresa que la inferencia efectuada por el tribunal en tal sentido es partir del supuesto que las lesiones podrían haberlo causado la muerte de no mediar socorros oportunos, pero de ello nada se dijo en juicio, y no se podía haber dicho ya que el afectado más grave nunca estuvo en riesgo vital.

Arguye que también se vulnera el principio de no contradicción, por cuanto si bien fueron dos personas las agredidas, al mismo tiempo y en un mismo lugar, con idénticos objetos, se diga que respecto de solo una de ellas hubo ánimo de matar y respecto de la otra solo hubo ánimo de lesionar.

A su vez, el recurrente señala que el Código Procesal Penal, establece el deber de fundamentar las resoluciones según su artículo 36 y 340, inciso segundo, en cuanto a la obligación del tribunal de analizar toda la prueba rendida, en armonía con el deber de fundamentación del artículo 297, inciso segundo, del mismo cuerpo normativo. A su turno, refiere que el artículo 342 del Código Procesal Penal establece el contenido mínimo que ha de tener toda sentencia criminal, pudiendo ésta permitir el razonamiento lógico por parte de cualquier tercero imparcial que pueda leer y comprender la sentencia.

Señala que por ello el artículo 374 del Código Procesal Penal indica los motivos absolutos de nulidad y que no requieren perjuicio.

Finalmente y en lo petitorio el recurrente solicita se declare la nulidad de la sentencia definitiva de fecha 11 de diciembre de 2022 y la el juicio oral que se efectuó y condenó a Maicol Cuevas Pérez por el delito de homicidio en grado de frustrado y por un delito de lesiones leves; remita los antecedentes para su debido conocimiento al Tribunal Oral en lo Penal no Inhabilitado que corresponda a fin de que este



proceda a citar a los intervinientes a una nueva audiencia de juicio oral y continuar su tramitación en conformidad a la ley.

TERCERO: Que, para resolver el presente recurso de nulidad planteado en virtud de la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, fundado en que en el pronunciamiento de la sentencia se ha incurrido en una errónea aplicación del derecho, que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, cabe expresar que son hechos de la causa:

“El día uno de mayo de 2022, alrededor de las 05:00 horas, Yeremi Elías Córdova Oyarzo y Maicol Cuevas Pérez, acompañados de otros dos sujetos, llegaron al domicilio ubicado en calle Ciriaco Álvarez N° 370, comuna de Coyhaique, ingresando con elementos contundentes (similar a un bate de béisbol), golpeando en reiteradas ocasiones en diversa partes de su cuerpo a Jaime Turena Oyarzún con ánimo de causarle la muerte; y a su hijo el joven de iniciales R.I.T.R, con ánimo de lesionar.

A consecuencia de dicho ataque Jaime Turena Oyarzún sufrió una fractura del piso anterior de la base del cráneo y compromiso de los senos frontales, fístula de líquido cefalorraquídeo, fractura del hueso frontal, contusión hemorrágica cerebral frontal derecha, como asimismo fractura del antebrazo izquierdo y que habrían causado la muerte a la víctima de no mediar socorros médicos oportunos. Por su parte al joven de iniciales R.I.T.R. le causaron poli contusiones de carácter leve.”

CUARTO: Que, debe tenerse presente, que a través de la causal que se examina, únicamente pueden denunciarse errores “in iudicando” es decir, vicios cometidos en el juicio jurídico del juzgador en la sentencia, sea en la interpretación de la ley, en la subsunción jurídica o en la determinación del hecho (Gonzalo Cortés, El Recurso de Nulidad, Doctrina y Jurisprudencia, Legal Publishing, página 170). Las modalidades de la infracción pueden ser respecto de la aplicación de la ley a una situación en la que no correspondía aplicarla; en la falta



de aplicación de la ley a una situación en que debía ser aplicada y la errónea aplicación o interpretación de la ley.

En consecuencia, la causal invocada, esto es, la existencia de un error de derecho en el pronunciamiento de la sentencia, requiere para que el recurso pueda prosperar, que exista un error en la aplicación de una norma decisoria litis, sea de naturaleza procesal o sustantiva, pudiendo consistir el error, en la falta de aplicación de la norma pertinente o su empleo indebido o bien, la aplicación de una impertinente y siempre cuando haya influido en lo dispositivo del fallo.

QUINTO: Que, en este sentido, el artículo 373 del Código Procesal Penal dispone, que procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia, cuando en el pronunciamiento del fallo se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo.

Que, al respecto, la Excma. Corte Suprema ha señalado que este motivo de invalidación apunta al contenido de la sentencia impugnada y, en particular, a las consideraciones de derecho sostenidas por los jueces del fondo para calificar un hecho como delito, como también respecto de las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal del acusado.

Que, asimismo, esta causal supone que el recurrente acepta los hechos fijados en el fallo, los que devienen en inamovibles, por ende, el reproche recursivo, debe entenderse dirigido únicamente al eventual error que observe en la interpretación y aplicación del derecho que regula tales hechos. Por consiguiente, resulta de perogrullo que el recurso debe indicar el derecho, esto es, la norma del ordenamiento jurídico que estima infringida a fin de realizar por este Tribunal de Alzada el análisis concreto de la infracción de ley acusada.

SEXTO: Que, así las cosas, de una atenta lectura del libelo pretensor se advierte, que el recurrente no ha indicado norma alguna del ordenamiento jurídico respecto de la cual estima se ha configurado



la infracción denunciada, refiriendo solo que en la especie no existiría el delito de homicidio frustrado porque no ha habido ánimo de matar a la víctima por parte del acusado, en consecuencia, esta omisión obliga a desestimar el recurso impetrado por la causal de invalidación prevista en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al motivo absoluto de nulidad contemplado en el artículo 374 letra e) en relación a los artículos 342 letras c) y d) y 297, todos del Código Procesal Penal, sostiene el recurrente que el fallo impugnado vulnera el marco normativo sobre valoración de la prueba, al contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, además de incumplir con el deber de la motivación y fundamentación de la sentencia.

Que, en síntesis, el presente recurso de nulidad, se sustenta en la causa de invalidación, consistente en haberse omitido en la dictación de la sentencia la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del Código del ramo, fundado en que la sentencia recurrida ha ido en contra de los principios de la lógica, bajo la variante de razón suficiente y principio de no contradicción, por estimarse que la sentencia omite fundamentar la valoración que hace de la prueba pericial, pues el fallo recurrido señala que según la pericia del Servicio Médico Legal, las lesiones causadas a don Jaime Turena son de carácter grave que durarían entre noventa a cien días, y que si bien no existió riesgo vital en un primer instante, luego requirió una prótesis en su cabeza.

Acusa, asimismo, infracción a las máximas de la experiencia en relación con una valoración omisiva, al ser un hecho de la causa que el motivo de la agresión fue una rencilla previa entre un menor de



edad con un tercero, conocido por los agresores y el ataque fue dirigido en su contra y no contra el padre de éste.

Que, en cuanto al principio de la razón suficiente, indica que el origen de la agresión fue precisamente para atacar a Rafael y no a su padre y que las lesiones infligidas al menor fueron leves, no existiendo fundamento probatorio para sostener que hubo un ánimo o intención de matar.

Estima igualmente vulnerado el principio de contradicción, por cuanto si bien fueron dos personas las agredidas, al mismo tiempo y en un mismo lugar, con idénticos objetos, se concluye que respecto de solo una de ellas hubo ánimo de matar y respecto de la otra solo hubo ánimo de lesionar.

OCTAVO: Que, al efecto el artículo 297 del Código Procesal Penal, establece que: “Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.”.

NOVENO: Que, de este modo se puede advertir que este sistema de valoración probatorio racional, reconoce dentro de sus elementos las reglas de la lógica, gobernadas por la coherencia y la derivación, basada la primera en los principios de identidad, no contradicción y tercero excluido, y la segunda en el de la razón



suficiente, por lo que al apartarse un fallo de esas premisas, el razonamiento resulta cuestionable, porque se trataría una valoración puramente subjetiva, provocando, en último término, un fallo arbitrario.

DÉCIMO: Que, respecto a los argumentos que justifican la causal de nulidad invocada deberán desestimarse, ya que, desde luego, la posibilidad de invalidar una sentencia con motivo de una errónea ponderación probatoria, impone al litigante la necesidad de identificar y describir tal error con precisión, exponiendo –como es pertinente al recurso de nulidad - en qué consiste y el modo en que fue capaz de influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo, lo que no fue expuesto con exactitud, rigor y claridad por el recurrente.

Se debe advertir la circunstancia de que, el recurrente, ni en su recurso de nulidad ni en su alegato, indicó, de manera clara y precisa de qué forma se ha producido la vulneración en la apreciación de la prueba y de qué manera las máximas de la experiencia y los principios de la razón suficiente y no contracción resultan vulnerados, limitándose aquél únicamente a cuestionar en su escrito recursivo, el hecho de que el Tribunal da por acreditado el delito de homicidio frustrado exclusivamente basado en la zona del cuerpo en que fue agredida la víctima Jaime Turena sin que existan otros antecedentes que avalen tal conclusión, considerando que los agresores no conocían a esta víctima pues habían mantenido conflictos anteriores con su hijo Rafael.

UNDÉCIMO: Que, en efecto, la conclusión a la que arribaron los sentenciadores, para condenar, lo fue en orden a que adquirieron la convicción, más allá de toda duda razonable, de que realmente se cometieron los hechos punibles objeto de la acusación y que en aquellos correspondió al acusado una participación culpable y penada por la ley, como expresamente lo mandata el artículo 340, del Código Procesal Penal, como se advierte claramente del considerando Décimo, que realiza una detallada, pormenorizada y fundamentada valoración de la prueba rendida en juicio, referida a la declaración de



testigos, los dichos de las víctimas y la contradictoria versión de los acusados respecto del desarrollo de los hechos, además de la prueba pericial, que versa respecto del resultado lesivo de la víctima Jaime Turena a consecuencia de la agresión con elementos contundentes. Es así, como en armonía con lo razonado en el motivo precedente, el considerando Undécimo califica jurídicamente los hechos establecidos en base a tales probanzas.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, este Tribunal ad quem estima que, en la sentencia recurrida se ha efectuado una valoración de toda la prueba producida en juicio, de acuerdo a las reglas de la lógica y específicamente el principio de razón suficiente, para establecer el hecho punible consistente en homicidio frustrado, pues en el motivo Décimo del fallo impugnado titulado “ Valoración de los medios de prueba” , se indica que las conclusiones fácticas señaladas en el considerando precedente, encuentran sustento en los testimonios y pruebas recibidos en la audiencia de juicio que, percibidos directamente por el Tribunal han justificado, la acreditación del hecho punible y la participación del imputado, por cuanto la prueba referida alcanza el estándar que importa y se espera en un pronunciamiento de condena.

Como primer argumento sostienen los sentenciadores que las hipótesis planteadas por los acusados en su defensa material, son incompatibles entre sí, ya que Córdova Oyarzo afirmó que el coimputado Cuevas Pérez ingresó al domicilio de las víctimas y procedió a golpearlos con un bate de madera y que su participación se remitió a golpear al joven de iniciales RITR, en tanto, Cuevas Pérez descarta su participación en los hechos, aseverando que nunca ingresó al domicilio de los afectados, ni menos golpeó a las víctimas.

Luego valora el Tribunal como elemento de convicción, los asertos de los ofendidos Jaime Turena Oyarzún y el joven de iniciales RITR, quienes aseveran contestes la dinámica de los hechos, siendo irrelevantes las diferencias que se evidencian entre ellos, para



considerarlas falsas o carentes de fiabilidad, obedeciendo a la propia percepción de los hechos. Estos dichos son armonizados con los testimonios de Solange Turena Ruiz y Giselle Díaz Barrientos, cuyas aseveraciones de los hechos ocurridos la madrugada del 1 de mayo de 2022, a su vez encuentran correlato en la denuncia que recibe Álvaro Alejandro Rivera Escobar, Sargento Segundo de Carabineros, de guardia tal día, indica que cerca de las 03:00 horas, arriba a la unidad policial la denunciante Giselle Díaz, quien le informa que recibe una llamada de su cuñada comunicándole que Alexis “Millaqueo” Pérez, su pareja Nataly y un grupo de conocidos, apedrearón el inmueble y ocasionan daños al vehículo de propiedad del suegro el cual estaba afuera del domicilio.

En este mismo orden de ideas, se encuentran los asertos de Jaime Manuel Rodríguez Araya, quien indicó que el 1 de mayo de 2022, por una denuncia de daños y robo, concurre al hospital donde encuentra a Jaime Turena Oyarzún el cual relata que ingresan cuatro sujetos a su domicilio a golpearlo, uno de ellos con pistola a fogeo. Indica que su hijo le señala los nombres, precisando que los golpes fueron de pies y puños.

Respecto de la naturaleza de las lesiones y su entidad se encuentran los asertos del perito Felipe Andrés Solari Saldías, quien realiza la pericia de fecha 19 de mayo de 2022, en donde Jaime Turena O, le indico en términos similares a lo expuesto en estrados, los hechos, esto es, el día, hora y lugar en donde ocurre la agresión, el reconocimiento de los participantes por parte de su hijo R, los elementos contundentes que se usaron en la agresión; las lesiones que presentaba en su cabeza y brazo, siendo trasladado al hospital local.

Refiere el perito que el paciente Jaime Turena O., fue hospitalizado con un diagnóstico de un TEC grave y una fractura de cúbito izquierdo. Recuerda que se adjunta epicrisis hospitalaria y el protocolo operatorio, en donde se registra como ingreso el día 1 de



mayo y su egreso 10 de mayo del 2022, consignándose como un TEC grave y una fractura cúbito izquierdo siendo está sometida a una cirugía de osteosíntesis y además de la neurocirugía observándose una minuta orbitaria derecha y con compromiso en el piso de la órbita alrededor de la zona. Indica que el paciente fue sometido a una cirugía en el contexto que se le efectuó una craneoplastia y se le instaló una prótesis en la comisión de la fractura; además se le efectuó una fistula del líquido céfalo raquídeo y canalización del hueso frontal. Del examen físico se constata herida operatoria desde por encima de la oreja y hasta la otra oreja; presentando un parche en el antebrazo con una capacidad reducida de sus dedos para la flexión. Expone que con fecha 17 de julio se informa el término de las lesiones, manteniendo las cicatrices quirúrgicas y catalogando las lesiones de carácter grave pues tardarían en sanar entre de 90 a 100 días, siendo compatibles con un ataque de un objeto contundente.

DÉCIMO TERCERO: Que de lo consignado en el motivo precedente se advierte precisamente, que las motivaciones del fallo en cuestión han explicitado que los hechos concluidos y establecidos por ella tienen una razón de ser u obedecen a una razón determinada, según la prueba rendida en autos, de tal manera esta segunda causal de nulidad del presente recurso habrá de ser rechazada, y así se declarará en lo resolutivo, especialmente si se considera el tenor del artículo 297, del Código Procesal Penal, en cuanto a la libertad de apreciación de la prueba y no habiéndose transgredido ninguno de los principios y elementos que limitan dicha apreciación, habiendo enunciado el Tribunal, las razones para establecer los hechos, sin perjuicio de que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, del mismo cuerpo legal, el Tribunal, fundamenta latamente, conforme a la prueba producida, razona, expone y explicita los elementos de convicción condenatoria, lo que aunado a, la naturaleza excepcional del recurso de nulidad, extraordinario, impide la revisión y nueva ponderación de la prueba producida y rendida en audiencia, en



la forma como la propone el recurrente, la que, de ser aceptada infringiría el principio de inmediación y bilateralidad de la audiencia y el carácter del procedimiento, esencialmente contradictorio, razones que impulsan al rechazo del recurso deducido.

DÉCIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, las máximas de experiencia, que no cita el recurrente, no han sido sobrepasadas ni infringidas por los sentenciadores. Los principios de la lógica, como se razonó, tampoco se han infraccionado, toda vez que a las deducciones que realizó el impugnador, pueden agregarse otras, de partida las que llevaron al Tribunal a la condena del imputado, sin que aquél hubiere transgredido los conocimientos científicamente afianzados, los que tampoco se mencionan.

DÉCIMO QUINTO: Que, de esta manera, la eventual contravención a los principios de la lógica, que es lo que puede deducirse, no obstante la sola alusión a infracción a lo dispuesto en el artículo 342, letra c), del Código Procesal Penal y que aduce la recurrente, sin perjuicio de que no son efectivas, son constitutivas, más bien, de un recurso de apelación que confiere otro tipo de competencia a estos Juzgadores y que este extraordinario recurso, de derecho estricto, no permite, debiéndose tener como inamovibles y definitivos los hechos establecidos por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, siendo soberanos para ello en la medida que en dicha acción no se hubiere infringido la normativa legal, que en el caso de autos no se visualiza ni acontece.

DÉCIMO SEXTO: Que, por el contrario, de la lectura íntegra, completa y con un simple ejercicio mental de correlación de los considerandos en los que se expuso la prueba rendida, en donde se practicó un razonamiento de ella para dar sustento a las proposiciones fácticas que determinaron la condena, debido a la convicción adquirida por los sentenciadores se encuentra, en demasía, adecuada y legalmente explicitada, lo que obligará a este Ilustrísimo Tribunal a



rechazar el presente recurso de nulidad por esta segunda causal y así se declarará.

Y TENIENDO PRESENTE, las disposiciones legales citadas y lo previsto en los artículos 352, 358, 372, 373 letra b), 374 letra e), inciso segundo del artículo 376, inciso segundo del artículo 377, 382 y 384 del Código Procesal Penal, **SE DECLARA SIN LUGAR Y SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad deducido por el Defensor Penal Privado, don Lorenzo Darío Avilés Rubilar, en contra de la sentencia dictada con fecha once de Diciembre del año dos mil veintidós, en cuanto se condenó al acusado Maycol Yonathan Cuevas Pérez y que lo condena por el delito de homicidio en grado de frustrado, en perjuicio de don Jaime Tureuna Oyarzún, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal en grado de frustrado y de lesiones leves en perjuicio de don Rafael Tureuna, previsto y sancionado en el artículo 494 N° 5 del Código Penal, en grado de consumado, cometido ambos delitos en la ciudad de Coyhaique el día 1 de Mayo de 2022, a las penas que se establecen en lo resolutivo del fallo, sentencia que, en consecuencia, no es nula, como tampoco el Juicio en la que se dictó.

Regístrese, notifíquese, dese a conocer a los intervinientes en el día y hora señaladas y devuélvanse los antecedentes pertinentes.

Redacción de la Ministro Titular doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Se deja constancia que no firma el Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente sentencia por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol Corte número: 248-2022 (Penal).-





XBLKXDZQTMP

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Coyhaique integrada por Ministra Natalia Rencoret O. y Abogado Integrante Marcos Ismael Gallegos R. Coyhaique, tres de febrero de dos mil veintitrés.

En Coyhaique, a tres de febrero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

